

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/003/2021.

ANTECEDENTES

I. VISTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. El dos de febrero de dos mil veintiuno, a las catorce horas con veinticinco minutos se recibió en la oficialía de partes del Instituto Electoral de Quintana Roo, (en adelante el Instituto), el expediente de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en lo siguiente el INE) identificado como UT/SCG/CA/BARU/JD01/QROO/26/2021, formado con motivo del cuaderno de antecedentes integrado a partir de las quejas presentadas por los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, respectivamente, mediante las cuales denuncian su presunta indebida afiliación al Partido Político Local denominado Confianza por Quintana Roo (en adelante el partido denunciado); dicha documentación fue remitida toda vez que, a juicio de la referida Unidad Técnica, este Instituto es la autoridad competente para conocer los hechos denunciados, dado que el denunciado cuenta únicamente con registro como partido político a nivel local, con lo que se estaría en presencia de hechos que presuntamente vulneran la normatividad electoral estatal.

II. CONSTANCIA DE REGISTRO. En virtud de lo anterior, el día dos de febrero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, (en lo subsecuente Ley local), se ordenó abrir el procedimiento ordinario sancionador con el número de expediente **IEQROO/POS/003/2021**, por ser esta la vía idónea para sustanciar el presente asunto, por lo que, a partir de lo anterior, la Dirección Jurídica (en lo siguiente la Dirección del Instituto), como área instructora, determinó lo siguiente:

***PRIMERO.** Se tiene por recibido el Acuerdo de incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral en el expediente UT/SCG/CA/BARU/JD01/QROO/26/2021, formado con motivo del cuaderno de antecedentes relacionado con las quejas presentadas por los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, respectivamente, en tal sentido, con fundamento en el artículo 415 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, regístrese bajo el número de expediente **IEQROO/POS/003/2021**.*

***SEGUNDO.** Infórmese a los integrantes de la comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto sobre el registro de la queja referida, en términos del artículo 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto.*

TERCERO.** Solicitar mediante oficio respectivo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Función de Oficialía Electoral de este Instituto, a las titulares de la Secretaría Ejecutiva, así como a la Coordinación de Oficialía Electoral y de Partes, ambas de este Instituto, el ejercicio de la fe pública a efecto de que se realice la verificación en el Sistema de Afiliados a Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, en el apartado partidos políticos locales disponible en la página de internet del citado órgano electoral, con la finalidad de corroborar en su caso, que los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, en cada caso, con claves de elector **, y *****, respectivamente, se encuentran afiliados como militantes del Partido Político local Confianza por Quintana Roo.*

Siendo que, en caso de acordar procedente dicha solicitud, se designa al Servidor Electoral Armin Geovany Osalde Pech, Coordinador adscrito a la Dirección Jurídica a efecto de auxiliar en el desahogo de la verificación solicitada.

En virtud de lo anterior, le solicito atentamente, en caso de ser procedente, la verificación precisada con anterioridad, y una vez que sea levantada el acta respectiva, en términos de lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Función de Oficialía Electoral de este Instituto, que la misma sean remitida a esta Dirección para la integración del expediente correspondiente

CUARTO. A efecto de contar con mayores elementos y en cumplimiento al principio de exhaustividad y en observancia de al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la Jurisprudencia 10/1997 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", así como en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, esta Dirección Jurídica determina lo siguiente:

- Requerir a la Titular de la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, a efecto de que realice una búsqueda en los archivos de la Dirección a su cargo, y en su caso, proporcione en copias certificadas la documentación relativa a la afiliación de los ciudadanos, **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, con claves de elector *****; ***** y ***** , respectivamente, como militantes del Partido Político local Confianza por Quintana Roo.

III. INSPECCIÓN OCULAR. El tres de febrero de dos mil veintiuno, previa autorización al respecto, se desahogó la verificación del contenido en el Sistema de Afiliados a Partidos Políticos del INE, en la que se constató con fe pública que los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, respectivamente, sí se encontraban registrados en dicho Sistema como afiliados del partido político denunciado, desde el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en cada caso.

IV. CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADO A LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Partidos Políticos del Instituto, dio contestación al requerimiento de información referido en el Antecedente II de la presente Resolución, haciendo constar que en los archivos de la Dirección a su cargo, el partido político denunciado celebró sus asambleas para la conformación y registro como partido político local, en el periodo comprendido de enero a octubre del año dos mil diecisiete, en relación a lo antes mencionado, los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte**, respectivamente, se encuentran registrados como afiliados al partido político denunciado, desde el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente.

V. AUTO DE RESERVA DE EXPEDIENTE Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se emitió un auto mediante el cual se determinó reservar la admisión, y eventual emplazamiento del expediente que se resuelve, a efecto de que la Dirección llevara a cabo las diligencias de investigación necesarias a fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si la conducta denunciada configuraba o no una falta a la normativa electoral, lo anterior, atendiendo a los principios de idoneidad, eficacia y de exhaustividad, y con fundamento en lo establecido en el artículo 417 fracción tercera de la Ley Local en correlación con el artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto (en adelante el Reglamento), en consecuencia de lo anterior, se acordó llevar a cabo la siguiente diligencia de investigación:

- *Solicitar mediante atento oficio respectivo a la representación del Partido Político Estatal Confianza Por Quintana Roo, ante el Consejo General de este Instituto, a efecto de que proporcione la documentación prevista en los artículos 11 y 12, de los Estatutos del Partido Confianza por Quintana Roo, mediante la cual los ciudadanos Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte fueron afiliados al referido instituto político.*

En atención a lo anterior, el día diez de febrero de la presente anualidad a las veinte horas con veintinueve minutos, se recibió en la Dirección la respuesta a tal requerimiento, mismo que señala entre otras cosas que “presuntamente” ya había efectuado la cancelación de los quejosos al partido político denunciado, mediante un anexo que consta de una copia simple del comprobante del Sistema de Verificación de Afiliados de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, con fecha de consulta el día cinco de febrero del año en curso a las diez horas con catorce minutos.

VI. CONSTANCIA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Una vez fenecido el término otorgado al partido político denunciado para atender el requerimiento de información referido en el Antecedente inmediato anterior, se hizo constar, para los efectos a que hubiera lugar, de conformidad a la normativa aplicable, en tal sentido, se determinó concluir el periodo de investigación preliminar de los hechos denunciados, y de igual forma, con fundamento en los artículos 415, párrafo primero, fracción III y párrafo segundo, 423 de la Ley Local en correlación al artículo 74 del Reglamento, se admitió los escritos de queja en el expediente que se resuelve, y por consiguiente, se ordenó notificar y emplazar al partido político denunciado, por conducto de su representación acreditada ante el Consejo General de este Instituto; en atención a lo antes expuesto, mediante oficio DJ/101/2021 se dio cumplimiento al emplazamiento de mérito para los efectos legales correspondientes.

En relación a lo anteriormente referido, el día quince de febrero del año en curso, la Dirección emitió un auto donde se acordó determinar por precluido el término concedido al partido político denunciado, a efecto de que compareciera a manifestar lo que en su derecho le conviniera y aportara, de ser el caso, las pruebas conducentes, derivado del emplazamiento realizado dentro del expediente que se resuelve por esta vía; esto sin que el partido político denunciado haya comparecido para los efectos conducentes.

VII. ADMISIÓN DE PRUEBAS. El quince de febrero de dos mil veintiuno se emitió la constancia de admisión de pruebas correspondiente, por lo que se fijó fecha y hora para el desahogo de las mismas para el día dieciséis del mismo mes y año; cabe señalar, que las únicas pruebas admitidas fueron las ofrecidas en su oportunidad por los quejosos y las recabadas en la fase de investigación por la Dirección.

A. Bryan Alejandro Reynoso Uribe. En su escrito inicial de queja ofreció los siguientes medios probatorios:

1.Documental Privada. Consistente en el memorial donde señala el desconocimiento de afiliación al partido político denunciado por parte del ciudadano. (Original)

2.Documental Privada. Consistente en la copia simple de su credencial de elector.

B. Cristóbal Aristóteles Moreno Canul. En su escrito inicial de queja ofreció los siguientes medios probatorios:

1. **Documental Privada.** Consistente en el memorial donde señala el desconocimiento de afiliación al partido político denunciado por parte del ciudadano. (Original)
2. **Documental Privada.** Consistente en la copia simple de su credencial de elector.

C. Julián Basora Duarte. En su escrito inicial de queja ofreció los siguientes medios probatorios:

1. **Documental Privada.** Consistente en el memorial donde señala el desconocimiento de afiliación al partido político denunciado por parte del ciudadano. (Original)
2. **Documental Privada.** Consistente en la copia simple de su credencial de elector.

D. Pruebas recabadas en la investigación preliminar por parte de la Dirección:

1. **Documental Pública:** Consistente en el acta circunstanciada con fe pública de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno.

2. **Documental Pública:** Consistente en el oficio DPP/117/2021, suscrito por la Directora de Partidos Políticos, en contestación al requerimiento de información efectuado mediante el Oficio DJ/086/2021, por medio del cual se desprende que dicha Dirección no contaba con los registros de afiliación de los quejosos.

VIII. ACTA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se realizó el desahogo de las pruebas admitidas, emitiéndose la constancia respectiva, en donde, entre otras cosas, se determinó dar vista a las partes, para que en vía de alegatos manifestarán lo que correspondiera en derecho; notificación que fue cumplimentada mediante los oficios DJ/135/2021, DJ/136/2021, DJ/137/2021, y DJ/138/2021, respectivamente. Al respecto, es de señalarse que en todos los casos no se obtuvo respuesta a la vista realizada.

NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN	VENCIMIENTO	CONTESTACIÓN
José Luis Novelo Vanegas Representante Propietario del Partido Confianza por Quintana Roo	DJ/138/2021	16 de febrero de 2021 (correo electrónico)	20 de febrero de 2021	No hubo contestación
Cristóbal Aristóteles Moreno Canul	DJ/136/2021	20 de febrero de 2021 (por estrados) ¹	24 de febrero de 2021	No hubo contestación
Julián Basora Duarte	DJ/137/2021	20 de febrero de 2021 (por estrados) ²	24 de febrero de 2021	No hubo contestación
Bryan Alejandro Reynoso Uribe	DJ/135/2021	24 de febrero de 2021 (por estrados) ³	28 de febrero de 2021	No hubo contestación

IX. ALEGATOS. El uno de marzo de dos mil veintiuno, la Dirección emitió un auto en el cual hace constar que una vez vencido el plazo para que las partes presentaran alegatos, ninguna compareció al efecto, por

¹ No se encontró en su domicilio y se notificó con cedula fijada en un lugar visible.

² No se encontró el domicilio y se notificó con cedula fijada en un lugar visible.

³ El quejoso ya no vive en ese domicilio.

lo cual, con fundamento en el artículo 423 párrafo primero y segundo de la Ley Local en correlación con el artículo 79 del Reglamento; se cerró la instrucción del procedimiento que se resuelve.

X. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El uno de marzo de dos mil veintiuno, visto lo anteriormente relatado, en el Antecedente precedente, se emitió el auto mediante el cual se determinó realizar el proyecto de Resolución correspondiente, a efecto de turnarlo en su oportunidad a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Comisión), por conducto de su Presidencia, para su análisis respectivo dentro del plazo previsto al efecto.

XI. REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, la Dirección, mediante oficio DJ/255/2021, remitió el proyecto de Resolución a la Consejera Presidenta de la Comisión, con el propósito de que el mismo fuera presentado a la propia Comisión, conforme a las disposiciones aplicables.

XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. El día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo sesión de la Comisión, en la que se aprobó el presente proyecto de Resolución. En tal sentido, el mismo día, mediante oficio CQyD/---/2021, la Consejera Presidenta de la Comisión, remitió el Proyecto de Resolución en términos de las disposiciones legales aplicables a la Consejera Presidenta del Consejo General, para que se presentara en dicho órgano superior de dirección, para su estudio y votación correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución General), en relación con los artículos 98, numerales 1 y 2, y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (en lo subsecuente Constitución local), los artículos 120, 123, 125, 140, 141, 157 fracción IX, 423 último párrafo y 424 de la Ley Local, así como los preceptos 82 párrafo segundo y 83 del Reglamento, el Consejo General de este Instituto es competente para emitir la presente Resolución.

SEGUNDO. FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. Que el artículo 410 de la Ley local, dispone que el procedimiento ordinario sancionador se sustanciará para el conocimiento de las faltas, y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere la propia Ley local, asimismo establece que los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento ordinario sancionador son el Consejo General, la Comisión y la Dirección.

Además, el artículo 417 de la Ley local, señala que la Dirección procederá al análisis del escrito de queja presentado, para determinar la admisión o desechamiento del mismo, en su caso, y de igual forma el artículo 422 de la Ley local, establece que la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. Los quejosos denuncian en esencia su presunta indebida afiliación al partido político denunciado; conducta con la que presuntamente se vulneran los artículos 41 fracción III de la Constitución local y 39 de la Ley local.

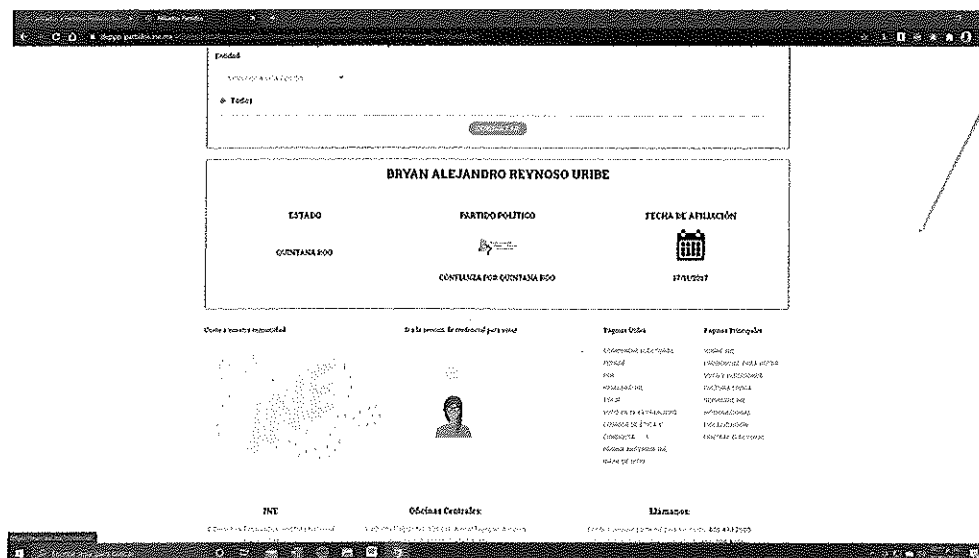
Para acreditar su dicho los quejosos dentro del expediente ofrecieron los siguientes medios de prueba:

- a) **Documental Privada:** Consistente en el memorial donde señala el desconocimiento de afiliación al partido político denunciado por parte de cada uno de los quejosos. (Original)
- b) **Documental Privada:** Consistente en copia simple de la credencial de elector de los quejosos.

Por su parte, el partido político denunciado no dio contestación al emplazamiento que le fue realizado, por lo cual se tuvo por precluido su derecho a aportar pruebas en el presente procedimiento, para todos los efectos a que hubiera lugar.

CUARTO. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A partir de lo manifestado en los escritos de queja, de las pruebas aportadas por los quejosos y de las determinaciones adoptadas por la Dirección para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se llevaron a cabo diversas actuaciones de investigación a efecto de constatar la existencia o no del hecho denunciado; las actuaciones mencionadas consistieron esencialmente para los efectos conducentes, en lo siguiente:

- La inspección ocular con fe pública, materializada en el acta circunstanciada levantada al efecto, para verificar en el Sistema de Afiliados a Partidos Políticos del INE, si los quejosos se encontraban afiliados o no al Partido Político denunciado; de lo anterior, se constató que los mismos, si se encontraban registradas en dicho Sistema de registro como afiliados del Partido Político denunciado, desde el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, tal como se advierte en las imágenes siguientes:



CRISTOBAL ARISTOTELES MORENO CANUL

ESTADO: QUINTANA ROO

PARTIDO POLÍTICO: CONFIANZA POR QUINTANA ROO

FECHA DE AFILIACIÓN: 30/12/2017

Acciones disponibles:

- Consultar el padrón electoral
- Consultar el padrón electoral por zona
- Pagos de cuotas
- Pagos de impuestos

Acciones disponibles:

- Consultar el padrón electoral
- Consultar el padrón electoral por zona
- Pagos de cuotas
- Pagos de impuestos

Acciones disponibles:

- Consultar el padrón electoral
- Consultar el padrón electoral por zona
- Pagos de cuotas
- Pagos de impuestos

Dicha acta con fe pública, constituye una prueba documental pública, con valor probatorio pleno, sin que exista en el expediente que se resuelve controversia alguna al respecto del contenido y eficacia de dicho medio probatorio.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.

Que precisado lo anterior, se procede a realizar la valoración de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, a efecto de determinar la existencia o no de la conducta denunciada en términos de la normativa aplicable y, en su caso, la posible vulneración de la misma, así como la presunta responsabilidad en torno a los mismos del partido político denunciado; en tal sentido, se debe señalar que del escrito de queja que da origen al presente procedimiento ordinario sancionador, se desprende que los

quejosos denuncian que, presuntamente, fueron afiliados de forma indebida (sin su autorización o consentimiento espontáneo y libre) al partido político denunciado.

La conducta presuntamente contraventora versa sobre una posible infracción por parte del partido político denunciado, al incumplir con las obligaciones que marca la Constitución Local, la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables en materia de afiliación.

Al respecto, en primer término, es pertinente precisar que el derecho de afiliación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución General, conforme a lo siguiente:

"Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I...

II...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
..."

"Artículo 40...

Base I...

...

*Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. **Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos;** por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa".*

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución General que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una *conditio sine qua non* de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución General, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De igual manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) ha sostenido que el derecho de afiliación es un derecho político electoral básico de la ciudadanía con caracteres propios, con un alcance superior al derecho de asociación que *"...faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse..."*, esto de acuerdo a lo sostenido en la jurisprudencia 24/2002, la cual es del rubro y texto siguiente:

"DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral".

Asimismo, el artículo 3, de la Ley local en su fracción III define afiliado o militante como:

"El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido político en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación". (énfasis añadido).

Por su parte, el artículo 51 de la referida Ley Local, en su fracción V, estipula que es una obligación de los partidos políticos **"...Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos"**.

Ahora bien, tal como se precisó en el Considerando tercero de la presente Resolución, los quejosos en sus escritos respectivos denuncian al partido político denunciado por **"...aparecer indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados."**, al respecto aportan dos medios de prueba, consistentes en documentales privadas, a fin de acreditar su dicho; en tal sentido, no obstante dichas documentales, dada su naturaleza, son pruebas que por sí mismas carecen de eficacia probatoria plena; empero, debe considerarse en el caso particular, que de la denuncia presentada por los ciudadanos quejosos, al estar relacionada con su indebida afiliación, es decir a una conculcación directa a un derecho político electoral de carácter activo de base constitucional, se tiene que basta el dicho de los quejosos para generar un indicio de veracidad de lo denunciado, salvo prueba en contrario, al tratarse de un hecho negativo.

Esto es, con la manifestación expresa de los ciudadanos en relación al desconocimiento de su afiliación partidaria, se genera un indicio de veracidad con respecto a tal vulneración del derecho político electoral de afiliación a un instituto político. Dicho criterio jurídico ha sido sostenido por la Sala Superior en la sentencia **SUP-RAP-107/2017**, la cual refiere que cuando se denuncie la indebida afiliación **"...la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de**

una documental, pues en términos de cargas probatorias tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”.

Además, debe considerarse que si una persona denuncia que fue afiliado a un partido político sin su consentimiento, como en el caso acontece, **corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expuso su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, o sea, el documento en el que conste la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político de que se trate;** esto, conforme a lo establecido en la Jurisprudencia 3/2019 de la Sala Superior, que se reproduce a continuación:

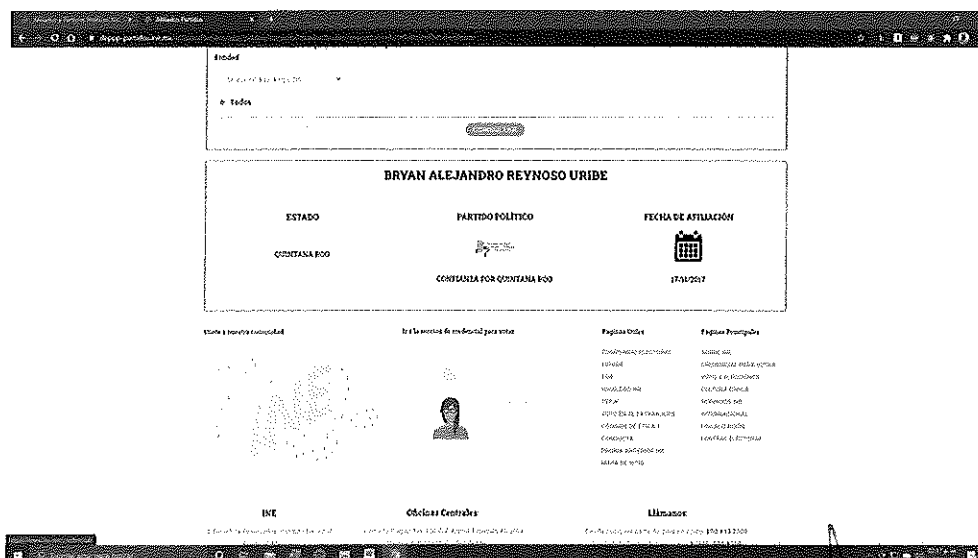
DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político. Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

De lo anterior, se colige que la carga de la prueba para desvirtuar los hechos que se imputan, le corresponde al partido político denunciado, mediante la exhibición del medio documental idóneo para ello; esto, a partir de que existe el señalamiento expreso respecto a que la afiliación se realizó de manera indebida, es decir que no fue un acto libre, expreso y espontáneo del ejercicio del derecho político electoral de afiliación política de los quejosos.

Derivado de ello se comprueba que efectivamente el partido político denunciado los tiene registrados como sus militantes, no obstante, lo anterior, la Dirección en apego a los principios de congruencia, idoneidad, eficacia y exhaustividad, determinó llevar a cabo una inspección ocular con fe pública a fin de corroborar indudablemente la existencia o no de la conducta presuntamente vulneradora al marco legal a la fecha del desahogo del procedimiento sancionador de mérito.

En tal sentido, de la verificación realizada con fe pública el día **tres de febrero del año dos mil veintiuno**, al Sistema de Afiliados a Partidos Políticos del INE se pudo corroborar indudablemente que, en dicho Sistema, al momento de la diligencia de mérito, se encontraban afiliados al partido político denunciado desde el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente.

Respecto a lo antes mencionado, de las diligencias efectuadas para allegarse de mayores elementos para resolver el presente asunto se desprende que del acta circunstanciada de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno el partido político denunciado efectivamente tiene registrados a los quejosos como sus militantes desde el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en cada caso, tal como se observa a continuación:



CRISTOBAL ARISTOTELES MORENO CANUL

ESTADO: QUINTANA ROO
PARTIDO POLÍTICO: CONTIANZA POR QUINTANA ROO
FECHA DE AFILIACIÓN: 30/12/2017

JULIAN BASORA DUARTE

ESTADO: QUINTANA ROO
PARTIDO POLÍTICO: CONTIANZA POR QUINTANA ROO
FECHA DE AFILIACIÓN: 04/12/2017

Papeles Principales:

- CONFERENCIA ELECTORAL
- PROTECCIÓN
- EDL
- MONEDAS DE
- ELPA
- VOTOS EN EXTRANJERO
- CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA
- FECHA REALIZACIÓN DE PAUTA DE VOTO
- VOTAR DE
- OPCIONAR PARA VOTAR
- VOTOS E ELECCIONES
- ANÁLISIS DE VOTOS
- RECURSOS DE
- REVISIONES DE
- FECHA REALIZACIÓN
- QUINTANA ELECTORAL

En tal sentido los denunciantes, arguyen que tal acción vulnera sus derechos político-electorales, ya que en ningún momento manifestaron su voluntad libre e individual de afiliarse al partido político denunciado, a lo cual, además, aducen un supuesto uso indebido de sus datos y documentos personales.

Cabe precisar que los denunciantes, no formularon alegatos en el presente asunto, a pesar de haber sido legalmente notificados de su derecho, así como de los plazos que tenían para apersonarse al procedimiento a expresar lo que a su derecho conviniera.

Además, debe considerarse que el partido político denunciado no aportó medio de prueba alguna para acreditar indubitadamente que los ciudadanos se afiliaron al mismo conforme a derecho.

En tal sentido, dicha conducta constituye una falta en materia electoral, dado que los partidos políticos están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y a ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, en consecuencia si un partido político afilia a unas personas sin su consentimiento, afecta la libertad del individuo a decidir, de forma autónoma, si se incorpora o no a la organización política, con lo cual incumple su obligación de respetar los derechos de las personas y conducirse conforme a la ley.

En tal escenario, quien fue inscrito a un partido sin que mediara su voluntad puede realizar lo siguiente:

- a) Buscar la desafiliación. Esto es, en ejercicio de su derecho político electoral, en su vertiente de afiliación, el ciudadano podrá optar por desincorporarse de la agrupación a la que fue inscrito.
- b) Buscar que se sancione al partido. Es decir, intentar que se imponga un castigo al partido que fue en contra de la Constitución y la Ley. Ambas vías de acción, si bien pueden ejercitarse de manera simultánea, son, independientes y persiguen objetivos distintos, además de que los órganos competentes para conocer de cada tipo de asunto son igualmente diferentes.

En primer término, la desafiliación tiene como propósito terminar el vínculo que une a una persona con un partido. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, si un individuo alega que lo afiliaron sin su consentimiento, tiene la posibilidad de dejar sin efectos ese acto, para lo cual serán competentes, en primera instancia, los órganos correspondientes del instituto político respectivo.

Ahora bien, si este hecho se da a través de un procedimiento sancionatorio seguido en contra un partido, por trasgresión a la legislación, tiene el objetivo de castigar al instituto político si se demuestra que trasgredió previsiones constitucionales y legales y, a largo plazo, busca inhibir la realización futura de conductas que se estiman reprochables como es el caso que nos ocupa.

Por ese motivo, si un partido que fue acusado de afiliar a una persona sin el consentimiento del individuo se defiende reconociendo la afiliación, necesariamente deberá demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad, situación que en el presente asunto no ocurrió puesto que de las diligencias desplegadas por esta autoridad y que en todo momento se otorgó al partido el derecho a defenderse en los plazos y términos establecidos por la Ley, dicho instituto político en ningún momento compareció en su defensa, haciendo caso omiso a los diversos requerimientos que se le hicieron.

Ahora bien, de las normas constitucionales, legales y criterios jurisprudenciales señalados se obtiene lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral es un derecho fundamental de las y los ciudadanos quintanarroenses para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas o no hacerlo.

- Afiliado o Militante es la ciudadanía que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido político en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación.
- Al partido político denunciado, de acuerdo a su normativa interna, podrán afiliarse las y los quintanarroenses por nacimiento o no y residir en cualquier lugar dentro del territorio del estado de Quintana Roo y que cumplan los requisitos que se establecen por el mismo.
- Todo ciudadano/a que desee afiliarse al partido político denunciado, deberá acudir ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o el Comité Municipal o Estatal correspondiente.
- Para obtener la afiliación al partido político denunciado, se requiere, además de ser ciudadano/a quintanarroense o no, llenar el formato de solicitud que se le entregue, en donde manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital, presentar copia simple y original de la credencial para votar actualizada y formato de afiliación al partido proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.

Ahora bien, con respecto a los ciudadanos quejosos, esta autoridad encontró los elementos suficientes para demostrar que en efecto el partido político denunciado los afilió de manera indebida y en contra de su voluntad.

Como se adelantó, el derecho de afiliación en materia política-electoral es un derecho fundamental que requiere, necesariamente y en todos los casos, la manifestación y consentimiento libre, voluntario y previo de la o el ciudadano que se incorpora o se suma en calidad de militante o afiliado a un partido o agrupación política, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción III de la Constitución General; como también se expuso líneas arriba, el partido político denunciado, en su normativa interna, prevé procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones, así como el mandato expreso que dicha afiliación siempre se realice de manera personal, pacífica, libre e individual.

Además, la normativa del partido político denunciado establece que, para afiliarse a dicho instituto político, se deberá contar con credencial para votar expedida por la autoridad electoral, y el formato de afiliación correspondiente que será proporcionado por la instancia partidaria que conozca del tema.

Con base en lo anterior, es claro que el partido político denunciado únicamente prevé un mecanismo concreto de afiliación, consistente en la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, así como la presentación de documentos en los que conste esa manifestación, así como los datos de la o el ciudadano que pretenda afiliarse (credencial de elector y formato de afiliación).

En tal virtud, los partidos políticos, tienen la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que conste y se pruebe ese hecho.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin.

En el presente caso, de las constancias que obran en autos, se colige que los ciudadanos quejosos fueron registrados sin su consentimiento, ello porque el partido político denunciado no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación a ese derecho fundamental garantizado desde la Constitución local y la Ley Local.

En ese sentido, se concluye que en el caso concreto de los ciudadanos quejosos, sus afiliaciones fueron indebidas, en atención a lo expresamente afirmado por los mismos y conforme al criterio emitido por la Sala Superior anteriormente invocado, en contravención con lo establecido en la obligación prevista en el artículo 51, fracción V de la Ley Local, lo cual vulneró el derecho político electoral de libre afiliación política de los ciudadanos quejosos, consagrado en el artículo 35 en su fracción III de la Constitución General, en relación con lo señalado en el precepto 41, fracción III de la Constitución Local, en correlación con lo previsto en el diverso 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que en consecuencia, se determina declarar la existencia de la irregularidad denunciada.

Atendiendo a la existencia de la irregularidad normativa denunciada, lo procedente es calificar e imponer la sanción que conforme a derecho corresponda.

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

1. Tipo de infracción (acción u omisión).

En la especie, tal como quedó asentado en los párrafos anteriores, la conducta atribuida al partido político denunciado, actualiza **una acción**, consistente en haber registrado a los quejosos realizando acciones que violentan sus normas y demás procedimientos internos, en materia de afiliación, conducta con la que se vulneran los artículos 35 en su fracción III de la Constitución General; 41 fracción III de la Constitución Local; 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos; y 39, en correlación con el artículos 51, fracciones V y XXII de la Ley local.

2. El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones constitucionales y legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte

de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental de reconocimiento constitucional que tienen las y los ciudadanos en nuestro país para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Particularmente en el presente asunto se acreditó que el partido político denunciado, incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a los ciudadanos quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la libre voluntad de estos de inscribirse en el padrón de afiliados del partido político denunciado, violentando con ello lo establecido en los artículos 35 en su fracción III de la Constitución General, en relación con lo señalado en el precepto 41, fracción III de la Constitución Local, en correlación con lo previsto en el diverso 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos.

Además, se incumplió con un mandato legal, previsto en el artículo 51 de la referida Ley Local, en su fracción V, el cual establece que es una obligación de los partidos políticos “...**Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos**”, vulnerando de esta manera, en la especie, el derecho político electoral de la ciudadanía a afiliarse de manera libre, voluntaria y espontánea a un partido político.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales transgredidas, radica en garantizar el derecho fundamental en materia político electoral de la ciudadanía mexicana de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa ciudadana señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto.

Por otra parte, como se analizó, para el caso en que no se demostró la voluntad de los ciudadanos denunciados de pertenecer como militantes del partido político denunciado, a partir de ello, además se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que lógicamente para instrumentar la afiliación partidaria denunciada, indudablemente se realizaron acciones en las que utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector del ciudadano para ser afiliado, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político denunciado.

3. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

A partir de las consideraciones que han sido sostenidas en la resolución que ahora se emite, se puede concluir que la conducta atribuible al partido político denunciado, se realizó al incumplir con lo establecido en la fracción V del artículo 51 de la Ley Local, por cuanto, a su omisión de cumplir con las normas de

afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos al efecto, violentando además el derecho ciudadano fundamental de base constitucional a la libre afiliación a los partidos políticos.

4. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevó a cabo, como son:

- **Modo:** La infracción consistió en un hacer instrumental de la indebida afiliación de los ciudadanos quejosos por parte del partido político denunciado, en contravención al marco constitucional y normativo aplicable, además de dejar de cumplir con las normas de afiliación ciudadana a los partidos políticos acorde a sus normas internas.

En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al partido político denunciado, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 35 en su fracción III de la Constitución General, en relación con lo señalado en el precepto 41, fracción III de la Constitución Local, en correlación con lo previsto en el diverso 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, en su aspecto positivo, al incluir en su padrón de afiliados a los ciudadanos quejosos, sin acreditar fehacientemente la voluntad de estos de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron afiliados, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

- **Tiempo:** La omisión del partido político denunciado ocurrió, de acuerdo con lo constatado por la autoridad sustanciadora, al menos, a partir del diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a la fecha de emisión de la presente Resolución.

- **Lugar:** La afiliación se registró a un partido político local, con registro en el Estado de Quintana Roo.

5. Los medios de ejecución.

El medio de ejecución consiste en un hacer, es decir en un acto material, consistente en afiliar de acuerdo a los Estatutos del partido político denunciado, sin el consentimiento libre de los ciudadanos quejosos, lo cual es relacionado con la incorporación de los datos de los quejosos al padrón de afiliados del propio denunciado, lo cual actualiza en una indebida afiliación, tal como ha sido precisado con anterioridad.

6. Comisión intencional (dolosa) o culposa de la falta.

La infracción acreditada en la presente Resolución, en el caso, es **intencional**, conforme con los siguientes razonamientos.

En principio, debe establecerse que, en el expediente en que se resuelve quedó plenamente acreditada la conducta denunciada, en razón de que de los elementos probatorios e indicios que obran en el mismo, es

dable afirmar que la omisión acreditada respecto del partido político denunciado, obedeció a una indebida afiliación en incumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 51 de la Ley Local.

Para dar claridad a la anterior conclusión, debe tenerse presente que de conformidad con la tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior de rubro **"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL"**, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador, toda vez que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal, son manifestaciones del *ius puniendi* estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies.

En esta lógica, es importante destacar, como marco referencial, que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal Federal **obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley**; asimismo, se establece que obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Ahora, si bien los partidos políticos como entidades de interés público están obligados a ajustar su actuación conforme a la Constitución General y las leyes que le resulten aplicables, y en el caso en particular la Ley local, ello no es suficiente para concluir que determinada conducta es dolosa, sino que se requiere además de elementos objetivos que nos permitan arribar a la conclusión de que el partido infractor actuó **conociendo la normatividad aplicable y sus obligaciones, previendo el resultado en caso de incumplimiento, y por ende aceptando la realización del hecho**.

En el presente caso, esta autoridad considera que el incumplimiento a la fracción V del artículo 51 de la Ley Local, por cuanto a una indebida afiliación, no puede ser considerada como una falta de cuidado o negligencia, ya que existen elementos objetivos que permiten concluir que dicha omisión fue intencional, pues si bien dicho partido político tiene como parte de sus obligaciones el realizar dichas afiliaciones en apego a la norma y a sus propios procedimientos establecidos en su normativa interna, ello no aconteció, **puesto que no se acreditó con ningún medio de prueba, que dicha afiliación se llevó a cabo de acuerdo con su normatividad interna**, tal y como quedó acreditado en la presente resolución, razón por la cual la omisión se realizó con pleno conocimiento de las consecuencias legales y la afectación que implicaba hacia los quejosos, lo que se tradujo en una infracción a la normatividad en esta materia, por la cual se está sancionado, de allí que se estime que la conducta es de carácter intencional (dolosa).

En conclusión, se tiene que de la conducta atribuida al partido político denunciado se desprende una intención específica del citado partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo).

Aunado a lo anterior, se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de partido político denunciado, en violación a lo previsto en los artículos 35 en su fracción III de la Constitución General, en relación con lo señalado en el precepto 41, fracción III de la Constitución Local, en correlación con lo previsto en el diverso 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y 51 de la referida Ley Local, en su fracción V, a razón de las siguientes consideraciones:

- El partido político denunciado es un Partido Político Local y, por tanto, tiene el reconocimiento constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución General en correlación con la Constitución local.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos, 41 fracción III de la Constitución Local, y 51 de la Ley Local. El partido político denunciado está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con los artículos 35, fracción III de la Constitución General, 41 fracción III de la Constitución Local, y 51 fracción V de la Ley Local.
- La libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano/a, en términos de los artículos 35 de la Constitución General y 51 en su fracción V de la Ley local. La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano/a elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público.
- Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus militantes.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la

guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos; por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano/a afiliado/a sin su consentimiento.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al partido político denunciado; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del partido político denunciado.
- 3) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) El partido político denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los ciudadanos quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

SÉPTIMO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

1. Reincidencia.

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido político denunciado, se considera que en el presente caso no se actualiza.

De conformidad con el artículo 407 de la Ley local, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la Ley local, incurra nuevamente en alguna infracción al referido ordenamiento legal, dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, de rubro *"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN"*.

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, los hechos denunciados ocurrieron el diecisiete de noviembre, treinta de diciembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, sin embargo previo a esa fecha no existe sentencia que sancione dicha conducta en consecuencia, no puede considerarse actualizado el supuesto de reincidencia por cuanto hace al partido político denunciado, pues en los archivos de este Instituto no obra algún expediente en el cual se le haya sancionado previamente a la fecha en que se llevó a cabo la afiliación indebida en los términos expuestos en esta resolución y hubiese quedado firme, por la infracción que se le atribuye.

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido el hecho notorio para esta resolutoria, de la sistemática recurrencia de la conducta denunciada en contra del partido político denunciado, que inclusive ha merecido en su oportunidad la imposición de las sanciones correspondientes conforme a derecho.

2. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el caso, se considera **grave ordinaria** en atención a lo siguiente:

- La infracción conculca previsiones constitucionales, legales y de la normativa interna partidaria. Debe destacarse que la infracción afecta un derecho fundamental de tipo político electoral de la ciudadanía.
- Se tuvo por acreditada fehacientemente la conducta infractora tal y como se ha establecido en la presente Resolución.
- Se trata de la actualización de una única conducta infractora.
- No se acreditó reincidencia.
- Como se estableció previamente la infracción es de carácter doloso.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción. Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho fundamental de libre afiliación ciudadana al partido político denunciado, pues se comprobó inobjetablemente que el partido político denunciado afilió a los quejosos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, en el que se establezca indudablemente la voluntad de estos de pertenecer a la lista de afiliados de dicho instituto político, violentado con ello previsiones constitucionales, legales y de normativa interna partidaria.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho fundamental de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido

respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del partido político denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- No existe reincidencia por parte del partido político denunciado.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político denunciado como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido político denunciado dolosamente infringió el derecho fundamental de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la ciudadanía reconocido en la Constitución General, la Constitución local y en la propia Ley Local.

3. Sanción a imponer.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley local confiere a esta autoridad, discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al partido político denunciado, por tratarse de un Partido Político con reconocimiento local, se encuentran especificadas en el artículo 406, fracción I de la Ley local.

Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas:

- a) Con amonestación pública;
- b) Con multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de las y los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
- c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la resolución;
- d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que le dio origen;
- e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución local y de la Ley local, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal, y
- f) Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el partido político se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la Ley Local, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido

político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una sanción no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la sanción que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

En ese sentido, tomando en cuenta las circunstancias objetivas que rodean la infracción; el dolo, la condición socioeconómica del infractor, que no existía reincidencia, que no fue posible acreditar un beneficio económico cuantificable; así como la gravedad del acto, se arriba a lo siguiente:

Es idóneo en el caso concreto, imponer una sanción correspondiente a la **reducción del financiamiento público otorgado mensualmente al partido político denunciado, a razón de un cinco por ciento (5%), por cada ciudadano que se considera fueron afiliados indebidamente**, lo anterior, toda vez que se parte del hecho de ser una conducta grave en tanto que se trata de una falta que se cometió derivado de una acción dolosa, que vulneró el derecho político electoral de libre afiliación política de los ciudadanos quejosos, consagrado en el artículo 35 en su fracción III de la Constitución General, en relación con lo señalado en el precepto 41, fracción III de la Constitución Local, en correlación con lo previsto en el diverso 25, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, la referida sanción resulta proporcional y suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, y fomentar que el infractor se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras, además de que, en modo alguno, no se considera excesiva y desproporcionada pues el infractor está en posibilidad de pagarla.

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo IEQROO/CG/A-002/2021, emitido por este Consejo General, se estableció que, entre otros, el partido político denunciado, recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

Sujeto	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2021
Confianza por Quintana Roo	\$ 77,409.08

En virtud de que los ciudadanos denunciados fueron afiliados en diferentes momentos, es procedente fijar una sanción de carácter individual por cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados.

En tal sentido, por cuanto, a **Bryan Alejandro Reynoso Uribe**, el monto mensual correspondiente a la reducción del cinco por ciento (5%) es de \$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).

Así mismo, por cuanto, a **Cristóbal Aristóteles Moreno Canul** el monto mensual correspondiente a la reducción del cinco por ciento (5%) es de \$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).

De igual forma, por cuanto, a **Julián Basora Duarte** el monto mensual correspondiente a la reducción del cinco por ciento (5%) es de \$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).

El monto total de la multa por los tres ciudadanos afiliados de manera irregular suma la cantidad de \$11,611.35 (Once mil seiscientos once pesos 35/100 M.N.) correspondiente al total de las tres mensualidades que se le deben de descontar de sus ministraciones en los meses de **septiembre, octubre y noviembre** del año en curso.

Ciudadano	Monto de la sanción, cinco por ciento (5%)	Mes de la aplicación de la sanción
Bryan Alejandro Reynoso Uribe	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).	Septiembre
Cristóbal Aristóteles Moreno Canul	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).	Octubre
Julián Basora Duarte	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N.).	Noviembre

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al partido político denunciado para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

En este sentido en términos del artículo 163 del Reglamento la presente sanción quedará inscrita en el registro de personas sancionadas por el Consejo General del Instituto, por un periodo de cuatro años, el cual se hará efectivo una vez que cause ejecutoria, para efectos de la calificación de la reincidencia.

Al respecto es importante señalar que, de conformidad con el artículo 471, último párrafo de la Ley local, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán aplicados a la ejecución de programas de cultura política por parte del Instituto.

4. Condiciones socioeconómicas del infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la reducción impuesta al partido político denunciado, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en los meses de **septiembre, octubre y noviembre** del año en curso, no afecta el desarrollo de las actividades del partido político denunciado.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, se determina que el partido político denunciado debe ser objeto de sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003, 41 emitida por la Sala Superior, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político denunciado —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a la falta cometida y se estima que, no resulta excesiva ni ruinosa.

5. Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece.

OCTAVO. CANCELACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS QUEJOSOS.

En virtud de todo lo antes resuelto, y toda vez que de las constancias que obran en el expediente de mérito se desprende que el partido político denunciado, señaló en su respuesta al requerimiento de información, una documental privada en la que se advierte la supuesta cancelación del registro de los tres ciudadanos quejosos, motivo del presente procedimiento, este Consejo General estima pertinente instruir a la Dirección realice las acciones necesarias para verificar que las cancelaciones antes referidas hayan sido efectuadas en los términos planteados por el partido político denunciado en su escrito de contestación que le fuera efectuado realizar, siendo que de no ser el caso, se ordene al partido político denunciado, para que sin mayor trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, cancele el registro de los quejosos como sus afiliados, y hecho lo anterior, informe lo conducente a la Dirección, adjuntando los medios de prueba pertinentes que acrediten tal cumplimiento.

Lo anterior, en concordancia con lo manifestado por los quejosos, quien, en el ejercicio libre de su derecho de afiliación política, manifestaron que no es su deseo pertenecer como afiliados al citado partido político denunciado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Por cuanto, a los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte** se declaran existentes las conductas denunciadas en el procedimiento ordinario sancionador identificado con el número **IEQROO/POS/003/2021**, en contra del partido político denunciado, por las razones expuestas en la presente Resolución.

SEGUNDO. Se impone como sanción al partido político denunciado una reducción del financiamiento público a razón de un cinco por ciento (5%) durante las ministraciones de tres meses, quedando de la siguiente forma:

Mes	Monto
Septiembre	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N).
Octubre	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N).
Noviembre	\$3,870.45 (tres mil ochocientos setenta pesos 45/100 M.N).

Lo anterior con fundamento en el artículo 406 fracción I, inciso a) de la Ley local, de acuerdo a lo razonado en el Considerando Séptimo de la presente Resolución, mismo que será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme.

En tal sentido, se instruye a la Dirección de Administración a efecto de que, en su oportunidad, realice los descuentos correspondientes.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica realice las acciones necesarias para verificar que la cancelación de los registros, motivo del presente procedimiento, hayan sido efectuadas en los términos planteados por el partido político denunciado en su escrito de contestación, siendo que de no ser el caso, se ordene al denunciado, para que sin mayor trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, cancele el registro de los quejosos como sus afiliados, y hecho lo anterior, informe lo conducente a la Dirección, adjuntando los medios de prueba pertinentes que acrediten tal cumplimiento.

CUARTO. Regístrese, en su oportunidad, al partido político denunciado en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Infracciones a la normatividad local, conforme a lo establecido en la presente Resolución.

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente Resolución, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a los ciudadanos **Bryan Alejandro Reynoso Uribe, Cristóbal Aristóteles Moreno Canul y Julián Basora Duarte** para los efectos legales conducentes.

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente Resolución, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, por medio del representante propietario ante el Consejo General de este Instituto, al partido político denunciado, para los efectos legales conducentes.

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución, mediante atento oficio por vía de correo electrónico, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, para los efectos legales conducentes.

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución, vía correo electrónico, por conducto de la Consejera Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, para su debido conocimiento.

NOVENO. Archívese, en su oportunidad, el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

DÉCIMO. Publíquese y difúndase la presente Resolución en los estrados y en la página oficial de Internet, ambos del Instituto.

DÉCIMO PRIMERO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica; los consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, todas y todos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós del mes de abril del año dos mil veintiuno en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.



MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA



LIC. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/003/2021.